

La protesta social de 2019 y la juventud: El octubre ecuatoriano

por **María Moreno Parra** | FLACSO-Ecuador | msmoreno@flacso.edu.ec

Alexander Amézquita Ochoa | Universidad Central del Ecuador y FLACSO-Ecuador | amezquita@uce.edu.ec

Angélica Mejía | Universidad Central de Venezuela | angelica.mc21@gmail.com

Las protestas recorren América Latina

En 2019, varias protestas sacudieron a América Latina. Su intensidad y convocatoria masiva tomaron por sorpresa a la región y, en algunos casos, constituyeron manifestaciones de una magnitud inédita, o al menos no vista en décadas. Las movilizaciones dejan múltiples interrogantes sobre cómo entender estas manifestaciones de descontento, los factores que las propiciaron, su relación con crisis económicas, políticas y sociales tanto nuevas como de viejo cuño, las formas organizativas emergentes y su relación con organizaciones tradicionales, los nuevos repertorios de acción, entre muchas otras cuestiones.

La interpretación debe tomar en cuenta que el ciclo de las *commodities* (materias primas) configuró la entrada de la región a un nuevo orden mundial de explotación y exportación de materias primas. Desde inicios del presente siglo, se experimentó un aumento de los ingresos de los estados en la región, así como de sus inversiones sociales, pero la incidencia de los gobiernos latinoamericanos en la reducción de las desigualdades en este periodo resultó superficial y limitada, independientemente de su filiación de izquierda o derecha (Daher, Moreno, y Aninat 2017; Camacho y González 2020; Sánchez-Ancochea 2019). Adicionalmente, este ciclo es parcialmente responsable de generar un nuevo plano de asimetrías, involucradas con prácticas extractivas, desigualdades territoriales, contextos de desposesión y respuestas restringidas a políticas identitarias (Kingstone 2018; Svampa 2013; Sanahuja 2016).

Estas asimetrías son apenas un componente de la comprensión de las movilizaciones recientes en América Latina. Giros ecologistas, defensa de la educación pública y una mayor integración de poblaciones rurales, indígenas y urbanas, también son el resultado del ciclo de las *commodities*, pues el mayor gasto social se refleja en muchos lugares a través de renovados empoderamientos, organización popular y ampliación de espacios para políticas de reconocimiento (González Meyer 2019). Sin embargo, las economías morales de las movilizaciones recientes en la región (Aguirre Rojas 2019) revelan que también las motivan las conexiones con ejes multidimensionales, expresados en nuevas ontologías y relaciones atribuidas entre naturaleza y cultura; oposiciones interseccionales frente a nuevas configuraciones conservadoras; y la incorporación renovada de un eje generacional que ya no se erige solo en el potencial revolucionario de la juventud, sino también sobre su expulsión sistemática respecto de protecciones sociales, políticas públicas e identitarias, y participación efectiva en la política.

Estos ejes, otrora relativamente independientes y aislados, encuentran una nueva economía moral en la que pueden ensamblarse, de formas más o menos programáticas. Ya sea en escenarios como el colombiano, donde la defensa del presupuesto para la educación superior encontró resonancias en el fortalecimiento reciente del movimiento campesino o en la ratificación de los acuerdos de paz; el chileno, en el que las distintas manifestaciones antisistema se configuraron en una plataforma para múltiples reivindicaciones generacionales, de género, sexuales y de clase; o

el boliviano, en el que las posiciones respecto a la expulsión política de Evo Morales funcionaron como un prisma para revelar nuevos racismos anclados a discursos conservadores y religiosos. La inconformidad de grandes contingentes de jóvenes en la región, con identidades diversas —la mayoría de ellos expulsados de procesos de inserción educativa y laboral, de participación política o de otro tipo de oportunidades— expuso un arsenal discursivo, así como un repertorio de movilizaciones desplegadas en el uso de redes sociales y nuevas formas de comunicación y organización, que es una manifestación de dicha economía moral y sus capacidades de articulación. Es por ello que realizamos una aproximación a las protestas en Ecuador desde la mirada de las y los jóvenes.¹

Octubre de 2019 en Ecuador

El 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció en el decreto 883 la eliminación del subsidio a la gasolina y otras medidas de ajuste como la reducción de salarios a empleados públicos. Esta decisión se enmarcaba en el cumplimiento de compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo día, el gremio de transportistas convocó a un paro general por 48 horas. Esta medida desencadenó una serie de movilizaciones durante 11 días, que constituyeron las protestas más intensas y masivas de las últimas décadas en Ecuador.

A pesar de que el gremio de transportistas negoció un alza en el precio de los pasajes, las protestas no cesaron. Fueron sostenidas por organizaciones sindicales y de estudiantes, y adquirieron una nueva dimensión cuando el movimiento indígena se puso a la cabeza de las movilizaciones y convocó a una protesta nacional. Miles de personas pertenecientes a sus organizaciones y comunidades se movilaron desde las provincias hacia la capital. Quito fue el centro del conflicto, aunque la protesta tuvo una dimensión nacional y adquirió un carácter de levantamiento popular. Junto con los manifestantes indígenas, amplios sectores de la ciudadanía organizada y no organizada expresaron su rechazo

a las medidas económicas: colectivos feministas, jóvenes, comunicadores alternativos, artistas, vecinos de barrios populares y miles de ciudadanos se sumaron a las protestas. Su lucha se dio a través de marchas, plantones, cierres de vía, tomas de edificios públicos, pronunciamientos, un cacerolazo general, entre otras formas de acción, que estuvieron acompañadas del despliegue de redes de solidaridad y apoyo al movimiento indígena.

La protesta generalizada no solo apuntó al “paquetazo” económico de Moreno, sino que cuestionó las relaciones de desigualdad de la sociedad ecuatoriana. La respuesta fue una inusitada violencia del Estado, con una declaración de estado de excepción prácticamente al iniciar las protestas. La represión dejó un saldo de 11 muertos, 1340 heridos y más de 1000 detenidos, 80 por ciento de los cuales resultaron de detenciones arbitrarias (Defensoría del Pueblo 2019). La protesta terminó con un diálogo televisado entre representantes del movimiento indígena y del gobierno nacional, y con la derogación del decreto 883.

Una acumulación de descontentos

Las manifestaciones de octubre de 2019, aunque sorprendidas en su intensidad y magnitud, venían precedidas de una acumulación de descontentos, más allá del detonante inmediato de la eliminación del subsidio a la gasolina. Estos descontentos se relacionan principalmente con el acumulado histórico de injusticias y violencias producto del modelo económico y político hegemónico. Un elemento clave fue el deterioro de la economía que comenzó durante los últimos años del gobierno de Correa, con un retorno a medidas neoliberales que se han profundizado en el actual régimen, y cuyas repercusiones se han sentido especialmente en los últimos años. Esta situación se ha reflejado en los indicadores económicos: la pobreza multidimensional se incrementó a partir de 2017, llegando a 37,9 por ciento en diciembre de 2018 (Chiriboga Tejada y Arias 2020, 188); mientras se observó una reducción del empleo adecuado, con

¹ Estas reflexiones se basan en el proyecto de investigación “Sujetos del Paro de Octubre en Ecuador”, financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Este artículo se ha beneficiado del intercambio intelectual con colegas de grupos de estudio convocados por la Fundación.

la tasa más baja en los últimos 12 años (Chiriboga Tejada y Arias 2020, 184), que para junio de 2019, solamente englobaba al 37,9 por ciento de los trabajadores (Acosta y Cajas Guijarro 2019).

La conflictividad social en Ecuador ha ido en aumento desde 2014, a partir de la caída internacional de los precios de las commodities y la profundización de las tensiones relacionadas con el extractivismo y la vulneración de derechos laborales. Estas tensiones se mostraban ya claramente en la “Marcha por la vida y la dignidad de los pueblos” en agosto de 2015. El movimiento indígena también cuestionó la falta de concreción en la práctica del estado plurinacional y denunció el desmantelamiento de la educación bilingüe. En 2016, las tensiones crecieron en los territorios indígenas y campesinos en resistencia a la megaminería, como el caso del territorio shuar de Nankints desalojado por una empresa minera china con la venia del gobierno. La criminalización de la protesta social caracterizó este período (Iza, Tapia y Madrid 2020, 79).²

Entre 2017 y 2018, el nuevo gobierno hizo un llamado al diálogo. Sin embargo, mientras avanzaban los acuerdos con las elites empresariales y financieras, se estancaban los diálogos con los movimientos sociales. El acuerdo con el FMI terminó por desgastar la relación con las organizaciones del movimiento indígena y de los trabajadores. Entre enero y septiembre de 2019, se registraron aproximadamente 30 acciones de hecho que respondieron a distintas agendas de organizaciones y movimientos sociales y al rechazo hacia las políticas económicas que venía adelantando el gobierno de Moreno.³

El gobierno demostraba un cierre institucional para procesar las demandas de los movimientos sociales. Luego de la ruptura de los diálogos en agosto, las organizaciones sindicales y el movimiento indígena llamaron a movilizaciones para la segunda mitad

de octubre. La expedición del decreto 883, el día 1 de octubre, precipitó las movilizaciones y generó una masiva respuesta popular.

La pluralidad de sujetos y la simultaneidad de las luchas

Si bien el paro convocado por los transportistas fue el factor desencadenante de las protestas, el protagonismo del movimiento indígena fue un hecho indiscutible. El movimiento se posicionó como actor central de las movilizaciones, con una nueva dirigencia y un discurso capaz de construir alianzas con diversos sectores, bajo la demanda de derogar el decreto 883. Octubre evidenció la capacidad del movimiento indígena de recomponerse luego de una década de represión y fragmentación, mediante un trabajo de reconstitución de las relaciones entre el liderazgo nacional y las bases (Altmann 2020). Con el llamado a paro nacional de la CONAIE, al que se sumaron organizaciones y comunidades de la FENOCIN y la FEINE, hombres, mujeres, niños, adultos mayores y jóvenes de comunidades indígenas y campesinas marcharon hacia Quito desde distintas provincias. El llamado fue exitoso y logró movilizar a veinte mil manifestantes indígenas para el paro del 9 de octubre y a más participantes los días subsiguientes (Altmann 2020, 3).

La movilización indígena se articuló, en una suerte de coalición de calle, con actores pertenecientes a sectores organizados y no organizados de clases populares, pero también de clases medias, con descontentos múltiples. No estuvieron ausentes organizaciones políticas más tradicionales como sindicatos y partidos, pero adquirieron especial relevancia actores colectivos ligados a lógicas de organización emergentes y más horizontales, como grupos ecologistas, feministas y de jóvenes. Los diversos perfiles de los manifestantes apuntan

² Entre 2007 y 2015, el total de personas judicializadas en el país llegó a 841 individuos, bajo las figuras de resistencia a la autoridad, terrorismo, sabotaje e incitación a la discordia; 90 por ciento de estos casos judiciales fueron iniciados por la Fiscalía en contra de indígenas, defensores de la naturaleza, trabajadores y estudiantes (Calapaqui Tapia 2017).

³ Entre ellas, se denunciaba la privatización de empresas públicas y de la seguridad social; las actividades extractivas y despojos territoriales; la pérdida de derechos laborales; los recortes al presupuesto para programas contra la violencia de género y por los derechos sexuales y reproductivos, así como la lucha por la despenalización del aborto; la desatención a las necesidades del campo; la falta de atención y financiamiento de gobiernos locales, el recorte al presupuesto a la educación, entre otras.

hacia una articulación plural en las movilizaciones de octubre, con una simultaneidad de luchas y variedad de motivaciones.

La participación de las mujeres fue contundente y transversal. Mujeres indígenas y mestizas, rurales y urbanas, feministas, organizadas o no, participaron al frente de las movilizaciones y también en los espacios de cuidado, en las ciudades o defendiendo los territorios, liderando la orientación de las acciones, fortaleciendo la memoria de lucha, y enfatizando el carácter anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista de la resistencia por la vida. En este sentido, “la lucha de Octubre se enlaza a un repertorio de acción construido por las organizaciones populares y feministas” (Iza, Tapia y Madrid 2020, 136).

Las redes de colaboración, solidaridad y cuidado fueron clave para sostener la protesta durante los once días. Múltiples voluntarios y voluntarias, así como miembros de organizaciones, encontraron una estructura para su participación en los centros de acopio y acogida humanitaria abiertos en diferentes universidades y centros comunitarios. En este sentido, las universidades jugaron un papel clave, al abrir espacios que fueron puntos focales donde se podía sostener la lucha y renovar las fuerzas. Las diferentes acciones de cuidado y protección de la vida (atención a heridos, hospedaje, alimentación, cuidado de niños y niñas, soporte emocional, etc.) encontraron una base de operación desde donde dar apoyo a los manifestantes. El acumulado y la influencia de las luchas feministas se expresa en la manera en que las actividades de cuidado fueron valoradas como acciones de igual importancia que aquellas que se llevaron adelante en la manifestación callejera.

Los jóvenes en la protesta social

Durante las protestas de octubre fue marcada la presencia juvenil. Su participación reflejó una amplia diversidad de perspectivas, militancias y condiciones: algunos con experiencia organizativa, pero muchos sin ella; de clases populares, pero también de clases medias; indígenas, mestizos y afroecuatorianos; jóvenes urbanos y rurales, estudiantes secundarios y universitarios. Las y los jóvenes participaron en la primera línea, en las brigadas médicas, en el aprovisionamiento de comida, medicina o insumos para la lucha en la calle, generando información, entre otras formas de participación.

Para una nueva generación de jóvenes indígenas, las manifestaciones de octubre fueron un momento de encuentro intergeneracional, en el que “los hijos y las hijas del gran levantamiento de 1990” observaron nuevamente la potencia del movimiento como actor político de primera importancia y la recomposición de los tejidos comunitarios y organizativos. Para la juventud indígena fue un momento de actualización de la memoria de lucha y repertorios de las generaciones anteriores, inscribiendo su acción política en una historia de resistencia de larga data.

Al mismo tiempo, para ellos, como para muchos jóvenes mestizos, octubre fue una muestra palpable del racismo recalcitrante de una parte de la sociedad ecuatoriana. Expresiones de racismo abierto surgieron en el discurso de políticos que llamaban a los indígenas a “regresar al páramo”, y en el de periodistas y ciudadanos que veían con temor la presencia de indígenas en la capital, estigmatizándolos como vándalos y salvajes. Estos discursos también llamaban a las fuerzas del orden a aplicar aún mayor violencia. Las expresiones racistas que circularon por los medios de comunicación y redes sociales motivaron a algunos jóvenes a involucrarse en las protestas, quienes expresaron su necesidad de posicionarse en contra de las ideologías racistas y la intensa represión policial. La indignación fue una emoción movilizadora para la mayoría. En la coyuntura de la protesta de octubre, las y los jóvenes vieron una posibilidad de tejer alianzas

interétnicas e interclasistas, y subvertir, al menos momentáneamente, las jerarquías sociales que estructuran la sociedad ecuatoriana.

Las protestas también se nutrieron de las formas de sociabilidad de los jóvenes y de su uso de las tecnologías de información y comunicación. Por una parte, se activaron redes de socialización primaria —grupos de amigos, compañeros, vecinos y familiares— para participar y darse protección en la protesta. Por otro lado, las plataformas digitales y las redes sociales fueron determinantes en la dinámica de las movilizaciones. La parcialización de la información impuesta por los medios de comunicación privados y la censura a las voces de los manifestantes, propiciaron la búsqueda de información en medios alternativos y, a su vez, que muchos jóvenes se articularan a la protesta desde el activismo digital. La creación y difusión de información alternativa logró romper el cerco mediático y la versión oficial que deslegitimaba la protesta.

La desconfianza de las y los jóvenes hacia el sistema político fue patente, con una valoración negativa de las instituciones y los partidos políticos, y una preocupación porque el Estado haya dejado de ser garante de derechos. Adicionalmente, otras tensiones que han marcado la política ecuatoriana se hicieron manifiestas en la protesta. A pesar de que ambos grupos estuvieron entre los manifestantes, las tensiones entre sectores correístas y anticorreístas se hicieron patentes en las movilizaciones. Los correístas pedían la salida de Moreno mientras que el movimiento indígena se desmarcaba de dicha propuesta y enfatizaba la oposición al decreto 883. En todo caso, la mayoría de manifestantes coinciden en que las medidas neoliberales representan una amenaza a la vida material de grandes sectores de la sociedad ecuatoriana.

Reflexiones finales

Aunque el logro inmediato de octubre fue la derogación del decreto 883, esto no implica que las demandas de la heterogeneidad de actores sociales participantes se limitaran a esta reivindicación puntual. Más bien apuntan hacia la necesidad de transformaciones mayores de un modelo económico que atenta contra la reproducción de la vida y la naturaleza; cuestionan los legados coloniales que se mantienen en las jerarquías raciales; llaman a la puesta en práctica del estado plurinacional; y denuncian la violencia hacia cuerpos y territorios de un sistema capitalista patriarcal.

Con el pretexto de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Moreno logró la aprobación de duras medidas económicas, incluyendo la liberalización del precio de los combustibles, recortes al gasto social y mayor flexibilización laboral. Aunque se han producido marchas y plantones en contra de estas medidas, surge una nostalgia por octubre dada la menor convocatoria de las mismas, en circunstancias en las cuales el movimiento indígena decide no movilizarse hacia Quito. A pesar de ello, para las y los jóvenes, octubre dejó un aprendizaje sobre la posibilidad de la protesta para transformar el orden social y sobre la importancia de la solidaridad de una multitud de voluntades para sostenerla.

Referencias

- Acosta, Alberto, y John Cajas Guijarro. 2019. "Ajuste del FMI: Cuentas sin cuadrar". *La línea de fuego: Revista digital*. <https://lalineadefuego.info/2019/08/20/ajuste-del-fmi-cuentas-sin-cuadrar-por-alberto-acosta-y-john-cajas-guijarro/>.
- Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2019. "Edward Palmer Thompson en América Latina: sobre la economía moral de las multitudes latinoamericanas". *Autoctonía: Revista de Ciencias Sociales e Historia* 3 (1): 1-15.
- Altmann, Philippe. 2020. "Eleven Days in October 2019: The Indigenous Movement in the Recent Mobilizations in Ecuador". *International Journal of Sociology* 50 (3): 1-7. doi:10.1080/00207659.2020.1752498.
- Calapaqui Tapia, Karla. 2017. *Criminalización de la protesta 2007-2017: Las víctimas del correísmo*. Quito: Dayuma Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Camacho, Fadia, y Joel González. 2020. "Política monetaria y choques de oferta: El fin del super-ciclo de commodities en América Latina". *Revista Económica de Centroamérica y República Dominicana* 1 (1): 61-100. <http://www.secma.org/recard/index.php/recard/article/view/164>.

- Chiriboga Tejada, Andrés, y Leonardo A. Arias. 2020. "La ruta al 'paquetazo' y el retorno de la economía fondomonetarista al Ecuador". En *Octubre y el derecho a la resistencia: Revuelta popular y neoliberalismo autoritario*, editado por Franklin Ramírez Gallegos, 69-194. Buenos Aires: CLACSO.
- Daher, Antonio, Daniel Moreno y Matías Aninat. 2017. "Efectos socioterritoriales en Chile del súper ciclo de los *commodities* y de su término". *Cadernos Metròpole* 19 (38): 127-155. <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2017-3805>.
- Defensoría del Pueblo. 2019. *Informe ejecutivo de personas detenidas*. <http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-detenidos-paro-nacional-%E2%80%93-Ecuador-October-2019.pdf>.
- González Meyer, Raúl. 2019. "Arritmias y recovecos del post-neoliberalismo en América Latina". *Revista de la Academia* 27 (agosto): 42-77. <https://doi.org/10.25074/0196318.0.1313>.
- Iza, Leonidas, Andrés Tapia y Andrés Madrid. 2020. *Estallido: La rebelión de octubre en Ecuador*. Quito: Ediciones Red Kapari.
- Kingstone, Peter R. 2018. *The Political Economy of Latin America: Reflections on Neoliberalism and Development after the Commodity Boom*. New York: Routledge.
- Sanahuja, José Antonio. 2016. "América Latina en un cambio de escenario: De la bonanza de las *commodities* a la crisis de la globalización". *Pensamiento Propio* 44: 13-25.
- Sánchez-Ancochea, Diego. 2019. "The Surprising Reduction of Inequality during a Commodity Boom: What Do We Learn from Latin America?" *Journal of Economic Policy Reform*, septiembre, 1-24. <https://doi.org/10.1080/17487870.2019.1628757>.
- Svampa, Maristella Noemi. 2013. "Consenso de los *Commodities* y lenguajes de valoración en América Latina". *Nueva Sociedad*, no. 244. <http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/6451>. //